



La consulta plantea varias cuestiones relacionadas con la instalación de sistemas de videovigilancia por el Ayuntamiento, para comprobar si se ajustan a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

La primera cuestión plantea si el Ayuntamiento ha recabado autorización de la Agencia Española de Protección de Datos para instalar el sistema de videovigilancia en el edificio de la policía local. Sobre este punto, se comunica que la Agencia Española de Protección de Datos carece de competencias para la autorización de sistemas de videovigilancia, siendo su competencia la de velar para que el tratamiento de datos derivado de la existencia de dichos sistemas resulte acorde a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de esta Agencia.

No obstante, podemos señalar que el referido Ayuntamiento notificó y tiene inscrito en el Registro General de Protección de Datos, un fichero de cámaras de videovigilancia de la Policía, cuyo nombre y finalidad declarada es “El control de acceso y vigilancia del edificio de la Policía” y “videovigilancia”.

En la declaración del mencionado fichero, consta que la Disposición General de creación del fichero se publicó en el Boletín de la Provincia, con el número 00067 y fecha de 9 de abril de 2008.

En cuanto al período de conservación de las imágenes, atendiendo a la finalidad descrita en la Disposición de creación del fichero, resulta de aplicación la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de videovigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras donde se prevé en su artículo 6 que “Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.”

Respecto al plazo que pueden conservarse las imágenes la Agencia se ha pronunciado en el informe de 3 de julio de 2008, en cuanto al fundamento de dicho plazo señalando que

*“El artículo 6 de la instrucción 1/2006, donde se regula el plazo de conservación de las imágenes está íntimamente relacionado con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999 que señala lo siguiente “Los datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido*



*recabados o registrados.”, dicha previsión se reitera en el artículo 8.6 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica. El criterio de la Agencia atendiendo a dicho principio ha sido entender que las imágenes grabadas para cumplir con la finalidad de seguridad, deben de conservarse como máximo durante un mes, una vez cumplida dicha finalidad, éstas deben de cancelarse. Por lo que dicho plazo sigue vigente tras la entrada en vigor del Reglamento dado que no se opone a las previsiones contenidas en el mismo.*

*A mayor abundamiento es preciso destacar que el plazo de un mes que en la Instrucción se establece para cancelar las imágenes, no es arbitrario, dado que se ha optado por seguir el mismo criterio que el fijado en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, que en su artículo 8 señala que “Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación”.*

*Por otro lado la instrucción señala expresamente en el artículo 6 que “los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación”, quiere esto decir que una vez transcurrido dicho plazo las imágenes deberán de ser canceladas, lo que implica el bloqueo de las mismas pues así lo establece, la Ley Orgánica 15/1999 que en el artículo 16.3 señala que “la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.*

La consulta, plantea también si la omisión del deber de informar de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, convierte en ilegales las cámaras. Para que la instalación de dichas cámaras se ajuste a lo dispuesto en la normativa de protección de datos, se exige el cumplimiento de determinados requisitos tales como; la legalidad del tratamiento de las imágenes. El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 al que se remite el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, establece que “El tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. Lo que obliga acudir a una Ley que prevea el tratamiento de las imágenes sin recabar el consentimiento del afectado.

En este sentido, La ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su artículo 11, regula sus funciones señalando que “1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones: (..) c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran”, en



consecuencia, podemos concluir que la Ley Orgánica 2/1986, legitima el tratamiento de las imágenes recabas en las dependencias policiales.

Asimismo deberá cumplirse con el deber de informar conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Instrucción 1/2006, y notificar e inscribir el fichero en el Registro General de Protección de Datos. Además de permitir el ejercicio de los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, en los términos del artículo 5 de la Instrucción. En el ejercicio de los derechos deberá de tenerse en cuenta las especialidades del artículo 23 de la Ley Orgánica 15/1999, pues se regulan las excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los ficheros de los que sea responsable las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último se plantea, si las grabaciones obtenidas a través del sistema de videovigilancia instalado en las dependencias de la policía local, pueden ser utilizadas como medios de prueba para exigir a los policías responsabilidades disciplinarias. Sobre este punto, indicar que la Agencia, carece de competencias para valorar qué pruebas o no pueden aportarse en un procedimiento disciplinario.

No obstante, según la finalidad declarada en el Registro General de Protección de Datos, el fichero creado es para controlar y vigilar el acceso al edificio, por ello, si las responsabilidades disciplinarias, fueran derivadas del acceso al mismo (horario de entrada y salida por parte de los policía) sí podrían ser utilizadas, no pudiendo ser utilizadas para otro tipo de finalidades, que no consten declaradas.

Por último, para el caso de que por el consultante se plantee la existencia de una actuación presuntamente contraria a la Ley Orgánica 15/1999, deberá dirigir su denuncia ante este mismo organismo, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias a fin de comprobar si procede o no la apertura del correspondiente expediente sancionador siendo así que el artículo 37.1.g) de la Ley atribuye a esta Agencia la potestad sancionadora en materia de protección de datos.

En todo caso las alegaciones efectuadas por el denunciante deberían contener la documentación acreditativa de la efectiva realidad de los hechos. Dicha denuncia deberá presentarse por escrito y dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en los términos que establece el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, debiendo contener:

- a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
- b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
- c) Lugar y fecha.



- d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. (en su caso sería la subdirección General de Inspección de Datos de esta Agencia)